

¿De vuelta al nacionalismo?

Por: Erick Rojas

Crece la certeza que el gobierno de Carlos Mesa es distinto al de Sánchez de Lozada, es persuasivo y cuenta con el apoyo de importantes sectores de la población, un capitalpreciado del que carecían los anteriores gobiernos. Si la tregua política se tradujera en medidas administrativas de impacto inmediato, como la reducción del gasto corriente en beneficio de la inversión, seguramente el romance entre pueblo y gobierno se prolongaría hasta el 2004.

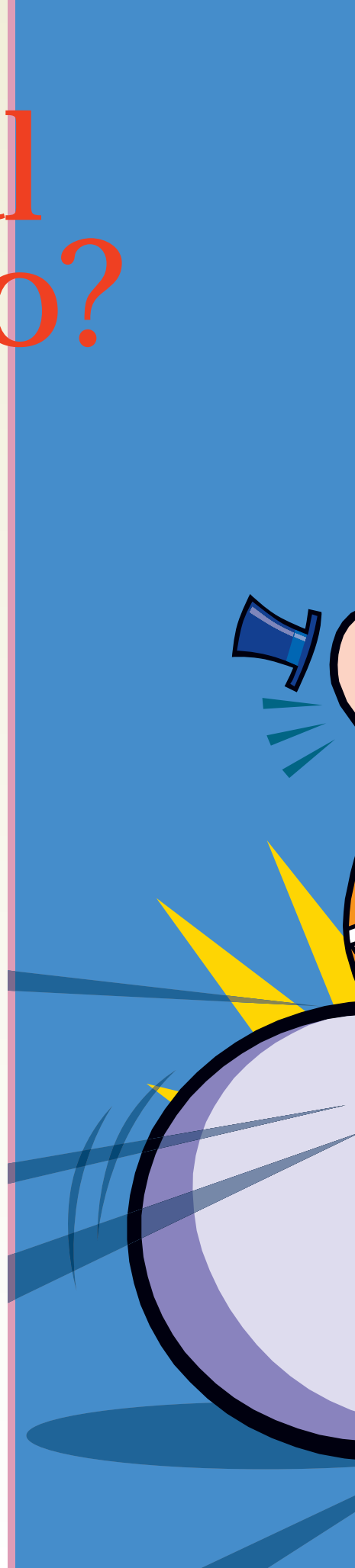
Se insiste, con un alto grado de sentido común, que la economía es buena o mala según las respuestas efectivas que da a la población. Se ha debatido hasta el cansancio sobre el fracaso de las medidas de ajuste estructural aplicadas a partir de 1985 y especialmente la capitalización (privatización en otras latitudes) de las empresas estatales que, hasta octubre de 2003, no lograron convencer a los bolivianos (y a otros pueblos latinoamericanos) de sus bondades.

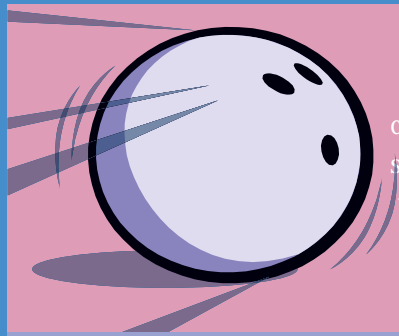
El crecimiento del desempleo, la sostenida caída del ingreso y particularmente la crisis económica que se traduce en el cierre de las empresas nacionales no tiene ningún grado de compensación que alivie la profunda crisis económica del país. Los programas HIPC I y II, los numerosos intentos de reactivación, las fracasadas medidas de corte fiscal en el vano intento de mejorar los ingresos y aliviar el déficit de la administración han contribuido a fortalecer el sentimiento nacional de acabar con el “modelo neoliberal”.

Durante la campaña electoral de 2002, el país, los partidos y los candidatos se vieron obligados a poner reparos a los resultados de la capitalización de las empresas y todos prometieron poner sus buenos oficios para revisar la capitalización, de tal suerte, que el propio Sánchez de Lozada tuvo que armar una coalición sobre la base de esta necesidad, nombrando a un Delegado Presidencial que se ocupara de revisar los libros, decisiones y resultados de las capitalizadas.

Después de las conflictivas y violentas jornadas de octubre de 2003, se llega a comprender que el descontento acumulado por la falta de respuestas a las crecientes demandas sectoriales contrastaba con la gran dosis de confianza de la administración de Sánchez de Lozada que apostaba la superación del

mal momento económico a la exportación del gas. Confianza que bordeó la autocomplacencia del sordo que no se molesta por el ruido de las calles pero que, por la misma razón, puede no prestar atención al ruido que deviene en peligro. Confianza que, en última instancia, no mostró palpables resultados, se desgastó en una pugna política por las cuotas de empleos, y que no se tradujo en una orientación serena y lúcida de a dónde se conducía a la economía nacional, especialmente al resaltar más la importancia del déficit fiscal, que una genuina preocupación por aumentar la producción y otorgar empleos sostenibles. Se insistió en dos medidas. El Bonosol y el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI); la primera, una medida recalentada de gran alcance social, pero sin el impacto que causó en el primer momento que se impuso en la primera gestión de Sánchez. La segunda, una gran idea sin el respaldo financiero suficiente que causó desequilibrios en más de un centro médico. Finalmente, la confianza se desvaneció por ausencia de información dirigida a todos los sectores de la población principalmente la referida al tratamiento de la venta del gas, así Sánchez tropezó en el mismo error que en su anterior gestión, no explicar nada de sus creativas ideas y esperar que ellas maduren por sí solas. Ni los movimientistas y sus aliados pudieron explicar lo simple y lo complejo de la capitalización, o el financiamiento del Bonosol, o de las pensiones del viejo sistema y, menos aún, la diferencia entre “pozos nuevos” y “pozos viejos”, ¿cuánto más podría aguantar la población que no estaba cerca de los círculos del poder?. Temas complejos exigen explicaciones simples que emergen del profundo conocimiento, el mismo que fue preservado en el cerebro de Goni y los de su entorno, muy cercano a la práctica dieciochesca del despotismo ilustrado.





La tregua política otorgada al nuevo gobierno, lo dicta la experiencia, tiene plazos que fenecen una vez que se comprueba que las respuestas se hacen esperar o simplemente se parecen a las del anterior gobierno. Es posible vislumbrar una tenue luz al final del túnel, pero llegar a ella está lleno de escollos como peticiones irracionales, exageradas, contradictorias y que contraponen a las regiones.

¿Una nueva etapa o más de lo mismo?

El achicamiento del Estado a partir de 1985 indudablemente fue un imperativo histórico insoslayable debido a la quiebra de las empresas públicas, el viraje vino acompañado de la crisis política e ideológica que hasta los 90 fortaleció la nueva concepción económica. Por eso es que los tradicionales sectores –grupos de presión– laborales y campesinos sin sus direcciones tradicionales chocaron una y otra vez con los distintos gobiernos cada vez con más fuerza a medida que se acrecentaba la crisis, pero carecían de dirección política y por tanto de un programa alternativo, aunque es palpable el surgimiento de caudillos que cuestionando “el modelo neoliberal” fueron arrancando reivindicaciones sectoriales de corto alcance.

La crisis económica no ayuda al esclarecimiento de una alternativa, de un nuevo modelo de desarrollo. Todas las voces, o algunas de ellas que pretenden recoger el clamor popular, coinciden únicamente en la búsqueda de la estabilidad económica, el crecimiento equivale a la utopía en la que todos “tienen derecho a soñar”, en tanto los distintos sectores chocan de tiempo en tiempo con esta cómoda visión de administrar la crisis.

Muchas voces de alerta dirigen su mirada a la crisis política (12 y 13 de febrero) y al grado de desenfreno de las protestas que ponían en jaque en forma sucesiva al gobierno que concluyó abruptamente su turno. La insurgencia campesina le puso un nuevo ingrediente insospechado a esta crisis que fue enfrentada con una supuesta habilidad de postergar las explosiones de descontento firmando todo tipo de acuerdos y convenios. El gobierno de Sánchez de Lozada apostó al desgaste de la protesta campesina, la minimizó y la reprimió violentamente.

En este marco se produce el giro de 180 grados en octubre de 2003. De la oposición a la venta del gas se pasa al pedido de renuncia del presidente. Los sectores movilizados con distintos objetivos se encontraron con una reivindicación “nacional” que los unificó y los consagró como victoriosos. Se cambió al gobierno por otro que, a pie juntillas, recoge las demandas populares que en el fondo cuestionan la esencia del estado neoliberal. Ese cariz tiene la exigencia de revisar la Ley de Hidrocarburos



para lograr que “la nueva administración” recupere la producción y comercialización para el país o, al menos, mejore su participación en la distribución de utilidades.

Ya no se necesita un documento con el compromiso gubernamental para evitar la venta del gas, se consigue un nuevo gobierno que lleve adelante esta exigencia. El gabinete del nuevo presidente surge con un “diminuto programa” prefijado e impuesto por la fuerza de la movilización. Enfrenta toda una estructura estatal intacta construida en los últimos 18 años de vigencia de libre mercado. Un parlamento integrado por los partidos tradicionales, agazapados, “todos en la oposición constructiva” esperando su turno para dar cuenta del “desleal” aliado independiente, un Poder Judicial signado por la corrupción y la ineficiencia, un Poder Ejecutivo estructurado al calor de los acontecimientos, con un norte por delinearse, en medio de la incertidumbre y condicionado por los plazos y demandas imperativas.

Realidad y buenos deseos

En medio del entusiasmo, surge una “opinión pública ciudadana” que nadie –a riesgo de ser abucheado– se atreve a cuestionar: el sentimiento general de estar transitando una nueva etapa histórica con gobierno que oye la voz del pueblo. Nuevamente se hace la vista gorda ante los reparos y advertencias que oponen los campesinos, para quienes la realidad no ha cambiado. Aquí la intuición indígena prefiere beber la experiencia histórica y restan credibilidad a la nueva administración. Ellos no festejaron el juramento de Carlos Mesa y lo pondrán a prueba una y otra vez. Todo hace prever que el próximo pliego de peticiones superará los 72 puntos de octubre de 2003.

Pero la clase media, empobrecida en los 18 años de “neoliberalismo” también le pasará la factura, en forma paulatina. La primera batalla será por el aumento de salarios en el presupuesto del 2004, la creación de fuentes de trabajo y luego vendrá el cumplimiento de las variadísimas demandas sectoriales.

La estabilidad económica pasa por dar claras respuestas a la generación de empleos productivos con la base productiva que la respalde. No se trata de colocar como único y principal objetivo, dentro de un escenario económico complicado y entreverado, la reducción del déficit fiscal, no obstante las exigencias del FMI, como el principal objetivo. Si este organismo no es capaz de entender lo que ocurre en las profundidades de la abigarrada sociedad boliviana, insistirá en sus viejas, acostumbradas y desatinadas fórmulas. La negociación con este organismo no puede prescindir de las muertes a las que condujo un

empecinamiento obsesivo por mantener una ortodoxia dogmática con repetidores criollos de textos universitarios y de los argumentos elaborados por burócratas internacionales. Superar la crisis supone la reactivación del sector productivo, generar el ahorro interno y condiciones para la inversión privada externa, temas ya diseñados por la anterior administración sobre la base de la exportación del gas, hoy cuestionada por la voluntad popular, y que el nuevo gobierno debe hacer filigranas para compatibilizar lo posible y racional con demandas que superan los recursos disponibles, las justas reivindicaciones sociales con el atraso histórico y circunstancial que no tiene fácil respuesta, con el atraso a dar respuestas que heredó de la anterior administración que ahora habita en Miami.

El apoyo internacional expresado por los países amigos se traduce en un saludo convencional y diplomático, que no necesariamente se trueca en generosas concesiones en materia de comercio o apertura de mercados. El uso de recursos internacionales de manera eficiente y expedita, no es una de las fortalezas del aparato estatal boliviano y eso es precisamente lo que ahora se necesita urgentemente.

La caída de la calificación del riesgo país a B- es una demostración de desconfianza difícil de remontar en el breve tiempo que dispone el actual gobierno. Asimismo, la revisión de la Ley de Hidrocarburos ya empieza a preocupar a los consorcios petroleros y abre interrogantes sobre el ingreso de nuevos capitales. La postura de los departamentos productores de hidrocarburos, especialmente, Tarija abrirá un frente de conflicto que potencialmente podría agudizarse en el plano político. Las cooperativas mineras cuyas demandas fueron postergadas bajo el amparo de la norma que impedía que el Estado acuda en su ayuda, hoy reflotan sus exigencias de apoyo estatal efectivo para lograr su reactivación.

La tregua política otorgada al nuevo gobierno, lo dicta la experiencia, tiene plazos que fenecen una vez que se comprueba que las respuestas se hacen esperar o simplemente se parecen a las del anterior gobierno. Es posible vislumbrar una tenue luz al final del túnel, pero llegar a ella está lleno de escollos como peticiones irracionales, exageradas, contradictorias y que contraponen a las regiones. Lo que es bueno para un ciudadano boliviano, del campo o la ciudad, del oriente, occidente o del sur; campesino, obrero o informal, no lo es necesariamente para el hasta ahora compatriota.

La credibilidad como alternativa a la crisis económica

Crece la certeza que el gobierno de Carlos Mesa es distinto al de Sánchez de Lozada, es persuasivo y

cuenta con el apoyo de importantes sectores de la población, un capital preciado del que carecían los anteriores gobiernos. Si la tregua política se tradujera en medidas administrativas de impacto inmediato, como la reducción del gasto corriente en beneficio de la inversión, seguramente el romance entre pueblo y gobierno se prolongaría hasta el 2004.

La credibilidad tiene que traducirse en acciones concretas como la aprobación de la Ley de Investigación de fortunas y el encarcelamiento de los autores de actos dolosos contra el Estado. Pero fundamentalmente, la credibilidad en la nueva administración permitirá retomar las gestiones de venta de gas a México y Estados Unidos, cuando todos los sectores coincidan en que el negocio –en la nueva etapa– garantiza la generación de ingresos que efectivamente sean canalizados a la inversión productiva, la industrialización del sector y la solución de apremiantes problemas de salud y educación.

De esta manera la credibilidad en la nueva administración, un factor poco apreciado por la academia, se constituiría en parte fundamental del proceso de la reactivación económica y, potencialmente, en un factor de persuasión para lograr consensos y así alcanzar metas de tipo fiscal.

Los condicionamientos

Las movilizaciones han impuesto al nuevo gobierno una mayor participación de la población mediante la consulta (Referéndum) y la reforma a la Carta Magna en la búsqueda de una administración estatal más equitativa mediante la instalación de una Asamblea Constituyente. Estos dos procesos conducen a la sustitución o sepultura de los partidos tradicionales, al menos, mientras dure el romance del pueblo con el nuevo esquema de gobierno “sin partido o militancia política”, lo que significa abrir la puerta a una deliberación horizontal del pueblo y sus instituciones, nunca antes conocida.

La tarea pendiente es conseguir los recursos de inversión destinados a transformar la estructura productiva agraria y el cumplimiento de las reivindicaciones inmediatas del sector que, por su diversidad, demanda un esfuerzo descomunal del exíguo aparato estatal. En todo caso, estaríamos transitando por una inocultable intervención creciente del Estado, en el plano de la transformación institucional y del aparato productivo, está claro que sin desconocer la participación de la inversión privada nacional y extranjera. La credibilidad es uno de los grandes capitales que tiene Carlos Mesa y debe usarla para transformar las percepciones de los movimientos nacionales, despejar las dudas de los organismos internacionales e inspirar nueva confianza a los inversores externos. A todas luces tareas nada simples ■